

El conflicto político como mecanismo de legitimización de alcaldes provinciales. Análisis de los casos de Arequipa (2002) y Espinar (2012)

The conflict as a means of legitimation of provincial mayors: Analysis of cases of Arequipa (2002) and Espinar (2012)

Verónica Hurtado*

Centro de Investigación de la Universidad Pacífico

Fecha de recepción: 12 de mayo

Fecha de aceptación: 18 de mayo

ISSN: 2219-4142

Hurtado, Verónica. «El conflicto político como mecanismo de legitimización de alcaldes provinciales. Análisis de los casos de Arequipa (2002) y Espinar (2012)». *Politai: Revista de Ciencia Política*, Año 6, primer semestre, N° 10: pp. 85-102.

* Verónica Hurtado se desempeña como Asistente de Investigación del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Ha obtenido el título de Licenciada en Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la tesis «El conflicto político como mecanismo de legitimización de los alcaldes provinciales: Análisis de los casos de Arequipa (2002) y Espinar (2012)». Sus temas de interés son conflictividad social, gobiernos subnacionales, industrias extractivas y participación ciudadana.

Resumen

En el actual contexto peruano, los alcaldes provinciales enfrentan serios problemas para mantenerse en el cargo obtenido o perseguir un futuro político. En este escenario, los conflictos sociales aparecen como una alternativa para obtener dicha legitimidad; sin embargo, dependerá del tipo de participación que se adopte si es que el alcalde se ve o no beneficiado de dicha oportunidad. El documento plantea un análisis de la participación de dichas autoridades en los conflictos sociales y los efectos de ésta en su carrera política.

En ese sentido, se argumenta que el esquema de participación, que contempla una clara firmeza en apoyo a las demandas de manera inmediata; pero, a la vez, la capacidad de negociación con el Estado; permitiría obtener el rédito político esperado. De otro lado, si la autoridad es o muy débil o muy radical, sus intentos de utilizar el conflicto social para su beneficio podrían fracasar. Para comprobar dicha hipótesis, se estudiaron los conflictos de Arequipa en el año 2002, y el conflicto de Espinar en el 2012.

Palabras clave: *Conflicto, Extractivismo, Gobierno Sub-Nacional, Arequipa, Espinar.*

Abstract

In the current Peruvian context, the provincial mayors face serious problems to remain in office or to pursue a future political race. In this scenario, the social conflicts arise as an alternative for obtaining such legitimacy; however, depending on the type of participation adopted, the mayor could or could not be benefited from such an opportunity. The paper presents an analysis of the participation of those authorities in social conflicts and its effects on his political career.

It is argued that the participatory scheme, which provides a clear firmness in support of demands immediately; but, at the same time, the ability to negotiate with the State; would yield the expected political revenue. On the other hand, if the authority is very weak or very radical, his attempts to use the social conflict to their advantage could fail. To test this hypothesis, I studied the conflicts of Arequipa in 2002 and Espinar in 2012.

Key words: *Conflict, Extractivism, Sub-National Government, Arequipa, Espinar.*

Introducción

A partir del proceso de reforma de descentralización, las autoridades subnacionales han enfrentado serios problemas de legitimidad para mantenerse en el cargo. Ante ello, un conflicto social puede aparecer como una oportunidad para construir su liderazgo político. Dentro de él, el patrón con mayores posibilidades de obtención de rédito político para la autoridad subnacional parte de una postura mediáticamente radical, donde legitima las demandas interpuestas por la población manifestante para luego optar por un rol conciliador que permita establecer el mejor acuerdo posible para las partes involucradas. Entonces, se trata de una combinación entre ambas posturas muy difícil de lograr por parte de las autoridades provinciales. Debido a ello no ha sido desarrollada como una herramienta para la consolidación política y, por el contrario, ha servido para perpetuar la fragmentación.

Se eligieron los casos en tanto poseen características muy diferentes acerca del tipo de conflicto que representan. En el caso del Arequipazo, se trata de un conflicto que nace con demandas en contra de la privatización de una empresa eléctrica. Por su parte, Espinar atraviesa - representa un conflicto enfocado en reclamos por los problemas ambientales surgidos a consecuencia de la actividad minera.

Por otro lado, las organizaciones involucradas en el primer caso son principalmente sindicatos constituidos con dirigentes de trayectoria política conocida, confluídos en un débil Frente Amplio; mientras que, en el caso de Espinar, el actor central es el Frente de Defensa de los Intereses de Espinar, que agrupa organizaciones sociales de pequeña y mediana escala conducidas por dirigentes esporádicos que toman notoriedad en la medida que participan de manifestaciones sociales.

Un tercer aspecto que diferencia ambos casos es el periodo de desarrollo. El Arequipazo se da en 2002 durante un tiempo aproximado de tres meses¹ y en el marco de un gobierno de transición democrática, con oportunidades importantes para el inicio de la movilización social; por otro lado, Espinar representa un conflicto de más de dos décadas en torno a los problemas que ha traído la actividad extractiva en la provincia y que estalla en 2012, durante el gobierno de Ollanta Humala, en coincidencia con el desarrollo del conflicto por el proyecto minero Conga en Cajamarca.

No obstante, en este estudio puede identificarse que existe un patrón de participación de la autoridad provincial, independientemente de las diferencias antes descritas. Primero, en ambos casos los alcaldes provinciales carecían de una aprobación mayor al 20% al momento de iniciar el conflicto.² En segundo lugar, ambos alcaldes poseían un pasado político vinculado a la izquierda y eran reconocidos como contestatarios; es decir, al interior de la población, mantenían una imagen fuerte con capacidad de transmitir demandas desde una postura de liderazgo. En tercer lugar, al finalizar el conflicto, ambos personajes eran conocidos a nivel nacional debido a la cobertura mediática de los sucesos. Esta condición permitió que su gestión municipal sea relanzada o que el futuro de los alcaldes alcance un mayor nivel político (regional o nacional).

Las fuentes de información primarias son dieciséis entrevistas a profundidad semi-estructuradas que se realizaron durante un viaje de trabajo de campo a las ciudades de Arequipa

1 Partiendo desde la etapa de planificación del conflicto una vez que se anuncia la intención de la privatización de la empresa EGASA.

2 En la etapa de planificación puede señalarse que, en el caso de Juan Manuel Guillén, durante el mes de mayo de 2002, alcanzó una aprobación del 8% a nivel de la provincia de Arequipa (EL BUHO 2002: 13). De otro lado, Óscar Mollohuanca alcanzó 18% en el mes de abril de 2012 (IPSOS Perú, 2012). Se reconocen las limitaciones que estas encuestas pueden tener, en términos metodológicos, sin embargo, constituyen la fuente más clara de información sobre la popularidad de ambos alcaldes al momento del conflicto.

y Espinar. Igualmente, se consideran fuentes primarias aquellos artículos periodísticos revisados para realizar la cronología del conflicto de ambos casos en la medida en que permiten determinar el grado de protagonismo que se le brinda o no al alcalde. También se recurre al uso de encuestas de opinión acerca de la aprobación de los alcaldes objeto de estudios, así como de los otros actores involucrados en el conflicto. Por último, como fuente secundaria, se considera tanto a los contactos iniciales realizados en Lima para el desarrollo del trabajo de campo, como a la revisión bibliográfica realizada.

Marco de análisis

De acuerdo con McAdam, Tarrow y Tilly (2001), podemos entender a la política contenciosa como la interacción episódica, pública y colectiva entre demandantes y sus objetivos cuando a) al menos un gobierno es un demandado, un objeto de demanda o una parte de las demandas y b) las demandas podrían, si se cumpliesen, afectar los intereses de al menos uno de los demandados.

Entonces, los actores que intervienen en la política contenciosa son cualquier conjunto de personas conectadas en un sistema político dado. En la práctica, todo actor que participa en el reclamo incluye al menos un grupo de personas previamente conectadas entre las que han circulado historias ampliamente aceptadas, relativas a su situación estratégica: oportunidades, amenazas, los medios disponibles de acción, posibles consecuencias de esas acciones, las evaluaciones de las consecuencias, la capacidad de actuar, los recuerdos de contención previa y repertorios de otras partes para cualquier acción (McAdam 2004).

La participación en los conflictos

Esta sección presenta una tipología de la participación en conflictos sociales, establecida a través de un *continuum* que parte del no involucramiento en el conflicto como primer tipo de participación hasta la participación activa. Esto se basa en la premisa según la cual la centralidad de un rol dentro de las movilizaciones se puede analizar en función a la cantidad de tareas o responsabilidades adjudicadas a la autoridad local y, a su vez, la capacidad que esta mantiene con los actores de otras agrupaciones (Diani 2004). Primero hallamos la categoría del «no participante». Al no participar, el alcalde puede decidir estar en contra de las demandas de la población y plegarse al demandado, o puede optar por mantenerse indiferente ante la situación y solo participar del proceso de diálogo según lo crean conveniente las partes del conflicto. En este caso, normalmente se trata de alcaldes provinciales o autoridades regionales que desestiman las demandas de conflictividad surgidas en pequeñas localidades, debido a que dichas manifestaciones no representan una verdadera merma a su popularidad.

Ahora bien, si se decide participar a favor de las demandas que originan el conflicto, hay matices dentro de la participación. La premisa de este tipo de acción es que el alcalde, como autoridad gubernamental, debe buscar lo mejor para su localidad; en ese sentido, no optará por medidas violentas que traigan como consecuencia pérdidas humanas o materiales de gran envergadura. Por ende, el primer tipo de participación será la «simbólica». De acuerdo a esta postura, la autoridad se remite a emitir declaraciones a la prensa y comunicados oficiales que manifiestan el apoyo de la municipalidad a las demandas de los pobladores, aunque en ningún momento aparece como un actor activo del conflicto. Los comunicados hacen un llamado al diálogo y la negociación, y plantean que se solucione el problema lo más pronto posible. Por otro lado tenemos la participación «pasiva», que implica la aparición en dos o tres concentraciones o protestas de los demandantes, declaraciones a la prensa y un llamado a las autoridades del gobierno nacional. Sin

embargo, no se le ve interactuando con los dirigentes de las organizaciones sociales o sindicatos que convocaron a las medidas de fuerza. Igualmente, los dirigentes no reconocen su autoridad gubernamental y lo consideran un participante más de la acción contenciosa.

La participación «activa» del alcalde en el conflicto, sin embargo, plantea algo totalmente diferente. Si bien sigue sin adoptar el liderazgo de la manifestación, aparece constantemente en las medidas adoptadas por la población para comunicar sus demandas. Asimismo, concurre a reuniones con los dirigentes y líderes de la protesta, en las que busca asumir la labor de comunicar los acuerdos y medidas ante la prensa y las autoridades gubernamentales correspondientes. No obstante, no es quien toma las decisiones ni tiene un protagonismo notorio en relación a otros actores políticos. Finalmente, se presenta la participación que asume un rol de «liderazgo». Este puede tomar diversos matices, pero el principal es que reconoce al alcalde como conductor de la movilización. De esta manera es la autoridad quien organiza y coordina con los otros dirigentes las acciones a tomar. Además, brinda las declaraciones ante la prensa y autoridades nacionales sobre las demandas de la población y las canaliza como propias. A la par, es reconocido por la población como el verdadero representante de las demandas y es aclamado como el tomador de las decisiones y acuerdos con el objeto de las demandas, que puede ser una empresa privada o el Estado central.

El liderazgo del conflicto y los brokers

Es oportuno analizar en concreto la participación de estos líderes en conflictos sociales. Para ello, Diani (2004) plantea una distinción entre «líderes» y *brokers* en movilizaciones sociales, otorgándoles a cada uno ciertas características especiales.

La capacidad para construir alianzas y coaliciones sería la variable que ha demostrado incrementar la influencia de los grupos de interés sobre las autoridades públicas en dominios clave de política como salud, energía o trabajo. Entonces, «la capacidad de la organización del movimiento social de convenir prospectivas alianzas para dedicar parte de sus escasos recursos organizacionales para cooperación con ellos, puede ser mirada cuidadosamente como prueba de su influencia en el sector del movimiento» (Diani 2004:107).

La manera más sencilla de medir la ubicación del actor dentro de las redes del movimiento social consiste en el número de compromisos que recibe de otros actores en la red. Esta medida sugiere que una organización del movimiento social va a ser central en su red tanto que la identidad de otras organizaciones de movimientos sociales serán consideradas como un socio en la alianza.

Desde otra perspectiva, también puede capturarse la influencia de la organización mediante la capacidad de relacionarse con diferentes sectores de un movimiento y, por lo tanto, su potencial rol como enlace de comunicación. Sin embargo, la influencia originada por los procesos de intermediación entre redes del movimiento puede no necesariamente llevar a asumir roles de liderazgo explícitos.

La dinámica en la que Diani está interesado es la del *broker* social. Un *broker* puede ser definido como un actor conectando otros actores que no están directamente relaciones. Desde esta perspectiva, la característica principal del *broker* será su capacidad para conectar actores que no se comunican debido a alguna barrera política o social específica. En estas ocasiones, el *brokerage* es crucial para la sobrevivencia de cadenas de interacción y, por lo tanto, para la conectividad de una red como un todo.

Los líderes del movimiento atraen los recursos, además de tener mejores posibilidades de representarlo en una esfera pública más amplia, en sus relaciones con los medios y en el corazón de las instituciones políticas. En contraste, quienes juegan un rol de *brokerage* no parecen afectar el perfil público de la organización del movimiento social en una forma significativa, si no para cada una de las organizaciones con las que se relacionan.

Teniendo en cuenta estas características, debe considerarse otra definición general de la categoría de líder, quien sería aquel actor estratégico encargado de la toma de decisiones, e inspira y organiza a los otros a participar en el movimiento social (Morris y Staggenborg 2002). Es importante establecer algunas diferencias en tanto los organizadores que crean la estrategia, desarrollan los proyectos, forman las demandas, o inspiran la participación son claramente un tipo de líder. Pero otros participantes en la organización de proyectos, que llevan a cabo tareas como recaudación de fondos y exploración, no deberían ser automáticamente considerados líderes. Incluso, es necesario ser consciente de que hay un orden vertical de liderazgo en la mayoría de movimientos sociales.

En ese sentido, se pueden establecer dos diferencias clave entre el líder formal y el portavoz. Por un lado, los líderes formales del movimiento no se limitan a ser portavoces, sino que proponen las metas del movimiento, determinan estrategias y tácticas, y determinan los resultados. Por otro lado, algunos portavoces de los movimientos pueden ser individuos que se proponen a sí mismos o son seleccionados por los medios de comunicación como «estrellas», pero no son líderes legítimos.

Las autoridades que nacen del conflicto

Los conflictos sociales

Arequipa

Durante el gobierno de Alejandro Toledo, las organizaciones sociales de Arequipa se opusieron a la venta de la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa – EGASA en el año 2002. Para comprender la situación en la que se da la movilización es importante mencionar la reciente caída del gobierno de Alberto Fujimori, la desaceleración en el crecimiento económico del país y el cuestionamiento cada vez más fuerte acerca del modelo económico que se estaba implementando en el Perú. Estos factores resultaron catalizadores para el desarrollo de pequeños grupos organizados de la sociedad civil, que buscaban movilizarse para manifestar sus propuestas y reclamos en el marco de un periodo de transición democrática (Tanaka M. 2005:32-33).

Ante esto, las diferentes organizaciones sociales arequipeñas consideraron oportuno pronunciarse y, mediante la convocatoria realizada por el Frente Amplio Cívico de Arequipa – FACA, se iniciaron diferentes medidas para evitar la privatización (Entrevista 04 A 2013). En su diseño institucional, esta agrupación planteaba el liderazgo de cuatro presidentes, los cuales tenían un periodo de tres meses cada uno. Los presidentes que asumieron el cargo durante los hechos registrados en junio del 2002 son los siguientes: Luis Saraya López, de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa; Gerónimo López Sevillano, del Sindicato de Construcción Civil; Leonardo Maquera Mamani, de la Central de Pueblo Jóvenes de Arequipa; y, Luis Vilca Pachao, secretario general del Sutep en Arequipa (Entrevista 05 A 2013).

En este contexto, se realizaron acciones en tres ejes. En el ámbito técnico, el FACA poseía una Comisión Técnica dedicada exclusivamente a determinar si era o no rentable la privatización de la empresa así como sus implicancias para el desarrollo regional. Por otro lado, se implementaron medidas en torno a la paralización.

Al respecto, Jorge del Carpio, uno de dirigentes del FACA, afirma que desde mediados de mayo se plantea la realización de una huelga de hambre en junio. Él es elegido como el presidente de comando de huelga. La catedral se convierte en un pseudo-cuartel para proseguir las acciones por la defensa de Arequipa, ya que se había fijado al 14 de junio como fecha de apertura de sobres para la venta de la empresa.

«[Decidimos] Quebrar a las organizaciones políticas, incluyendo a la del partido de gobierno. Logramos que el partido Perú Posible declare estar en contra de la privatización y en contra de su gobierno. Esa fue una medida de dividir las fuerzas enemigas [...] y lo conseguimos. [...] Se determinó la toma de locales para la propaganda de la lucha» (Del Carpio 2013).

Además, se había planificado con anticipación la realización de la huelga de hambre en la catedral, con apoyo del sindicato de construcción civil, quienes se plegaron a la protesta (Entrevista 02 A 2013).

Por ello, sobre la planificación del conflicto, debe mencionarse el rol protagónico que asume el FACA, un grupo organizado que buscaba defender los valores democráticos y la lucha contra las privatizaciones. Sin embargo, durante la «acción» en el conflicto, se vieron relegados ante la autoridad reconocida al alcalde provincial de Arequipa.

Se incorpora entonces a la manifestación Juan Manuel Guillén Benavides con la presentación de una acción de amparo para evitar la privatización, junto a otros alcaldes que acataron una huelga de hambre tres días después de la realizada por los miembros del FACA en la catedral. Las razones que motivan la participación de dichos alcaldes son diversas. En primer lugar, se trataría de una respuesta a la presión que los habitantes de sus localidades ejercían sobre ellos (Entrevista 04 A 2013). Por otro lado, podría haber obedecido a la baja popularidad que gozaban en sus respectivas circunscripciones (Entrevista 02 A 2013).

Cuando se anunció que la empresa Tractebel gana la concesión de EGASA y EGASUR, se realizaron concentraciones en la Plaza de Armas y Arequipa se declaró en huelga indefinida. No había transporte público, los establecimientos dejaron de atender y se suspendieron las labores escolares y académicas. Las movilizaciones y choques con la Policía incrementaron. Se utilizó la medida conocida como «cacerolazo» a horas determinadas, con el fin de mantener vivo el «espíritu de lucha» (Saraya 2006:13). Además, la toma del aeropuerto, liderada por Felipe Domínguez, del Frente de Defensa del Cono Norte, se habría dado como una respuesta a los rumores de aviones militares que llegarían a Arequipa a pacificar la situación de conflicto (Entrevista 04 A 2013). El 18 de junio llegó una Comisión de Alto Nivel presidida por monseñor Fernando Vargas, acompañado de representantes del Estado, para iniciar la negociación. En esta etapa puede resaltarse nuevamente el rol del alcalde; sin embargo, esta vez sobrepasa a las organizaciones sociales ampliamente, a la vista de las autoridades y la población. Primero, debe mencionarse que el diálogo se produjo en el colegio San José, el 19 de junio, siendo invitados el alcalde, los presidentes del FACA y los representantes del Estado central. No obstante, desde antes de ingresar a la reunión, se había coordinado dejar la toma de las decisiones al alcalde Guillén en la medida que era «la autoridad del pueblo que representaba nuestros intereses» (Entrevista 05 A 2013). Igualmente, algunos representantes de la sociedad civil fueron excluidos del proceso de negociación y tuvieron que asumir los acuerdos una vez concluida la reunión y la firma del acta de solución del conflicto (Entrevista 02 A 2013).

Espinar

La mina de Tintaya, ubicada en la provincia de Espinar, en la región del Cusco, está en operación hace más de 25 años. Con su puesta en marcha, Espinar se convirtió en la zona minera más destacada de la región y una de las más importantes del sur del país. La trayectoria de la mina muestra diferentes etapas desde la fase inicial, bajo la gestión de una empresa pública, pasando por la etapa de privatización y la llegada de empresas transnacionales, que expandieron aún más las operaciones mineras en la segunda mitad de la década de 1990 (De Echave et al. 2009).

En este periodo se fueron creando y reproduciendo un conjunto de demandas que estuvieron en la base de conflictos importantes, tanto en los espacios rurales vecinos a la operación minera como a nivel de toda la provincia. Los temas centrales del conflicto han girado en torno a los impactos de la minería en los recursos naturales de la zona y a la demanda de que la actividad minera se vincule y aporte al desarrollo de la provincia (De Echave et al. 2009). Los principales momentos de conflicto y discrepancia se producen entre los años 1990 a 2005. No obstante, en mayo de 2012, surge un nuevo estallido ante la no respuesta de la empresa minera Xstrata Copper – Proyecto Tintaya Antapacay a la posibilidad de renegociar el Convenio Marco firmado en el año 2003,³ así como la creciente desconfianza hacia las prácticas ambientales de la empresa (Entrevista 07 E 2013). En el año 2010, se conoce en Espinar el estudio de riesgos a la salud por exposición a metales pesados, realizado por CENSOPAS (Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud), órgano de línea del Instituto Nacional de Salud. En este documento se advierte la necesidad de realizar un monitoreo permanente en la población, ya que se identificó que el 5.5% de la población evaluada presentó valores por encima del límite de referencia de mercurio (CENSOPAS 2010).

Tras estos resultados, la población demandaba a la empresa ampliar los aportes al desarrollo socioeconómico; cerrar o reubicar la presa de relaves de Huanipampa; y asumir compromisos ambientales ante posibles impactos de sus actividades en la zona. Igualmente, los reclamos buscaban una solución inmediata a los problemas de contaminación en aire, suelo y agua. Para ello, requerían la mitigación, remediación, reposición, reubicación y/o indemnización de los daños ambientales. Asimismo, la población pedía una auditoría ambiental internacional, neutral del cierre de la mina Tintaya y nuevas operaciones Antapacay (Entrevista 04 E 2013).

En la etapa de «planificación», puede identificarse algunos hitos importantes que presentan una ruptura del diálogo a partir del año 2011. El 28 de noviembre de 2011, la Municipalidad Provincial de Espinar cursa una carta notarial a los representantes de Xstrata Tintaya con la que adjuntan la propuesta de Reformulación del Convenio Marco. Horacio Quispe, Secretario General del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar - FUDIE en el periodo 2004-2006, explica que si bien el Convenio era útil en su momento, dejaba demasiados puntos abiertos. En ese sentido «siempre se supo que había que renegociar» (Quispe 2013). El 20 de enero de 2012, los transportistas miembros de la Frente de Defensa de los Transportistas de Espinar se pliegan a los reclamos.

El 2 de febrero de 2012, los representantes de Xstrata Tintaya se reúnen con dirigentes de la provincia de Espinar, el alcalde de Espinar y el Presidente Regional, Jorge Acurio, para iniciar las reuniones para el proceso de Reformulación del Convenio Marco; sin embargo, no llegan a tener acuerdos concretos sobre si es o no necesario iniciar un proceso de reformulación. Aparentemente, se habría buscado sabotear la negociación, alargando el debate sobre asuntos técnicos que no ayudaban a llegar los consensos necesarios para llevar la reformulación adelante (Entrevista 01 E 2013). En paralelo, se produjo un intento para realizar un nuevo estudio sobre los niveles de contaminación en la zona, nuevamente conducido por CENSOPAS. En este contexto «el movimiento social, con sus organizaciones sociales y el alcalde de Espinar, con una actitud crítica a la actividad minera, afirman que si existen indicios de contaminación» (Entrevista 04 E 2013), de tal manera que exigen una respuesta por parte de la empresa minera y del Estado.

3 Acuerdo celebrado entre la empresa minera BHP Billiton, en ese momento encargada de la concesión del proyecto Tintaya, la municipalidad de Espinar y los representantes de las principales organizaciones sociales de la provincia. En dicho documento, en la cláusula quinta, se estableció que la empresa se compromete a contribuir con hasta un máximo del 3% de sus utilidades antes de impuestos, y como mínimo, con un monto fijo anual de un millón y medio de dólares, para el desarrollo de la provincia de Espinar, incluyendo las comunidades de su entorno (BHP Billiton 2003).

El alcalde Mollohuanca estaba muy interesado en lograr la renegociación del Convenio desde que asume la alcaldía de Espinar. «Parte de la agenda de Óscar Mollohuanca es que en su propuesta de campaña anuncia la reformulación del Convenio Marco [...] para eso pide una serie de entrevistas, hace cartas, pronunciamientos, a la mina y al Estado, para que se pueda canalizar o viabilizar» (Entrevista 04 E 2013).

La paralización del 21 de mayo es liderada por el FUDIE, cuyo Secretario General es el Sr. Herbet Huamán Llave. Igualmente, Wilbert Huaylla Quispe, asume un rol de líder en el conflicto, convocando la participación masiva de los transportistas en Espinar. Óscar Mollohuanca también es reconocido como líder de la movilización, en tanto mantiene su postura como gobierno local y respalda la paralización (Entrevista 02 E 2013). Existió un aparente apoyo mayoritario de la población, sin embargo se ha comentado acerca de la escasa participación de las comunidades campesinas alejadas de las zonas urbanas de la provincia (Entrevista 04 E 2013).

Para el octavo día de huelga, el Ministro del Interior informó que había 76 policías heridos producto de los enfrentamientos. Como resultado, se declara Estado de Emergencia a la provincia de Espinar durante 30 días. Paralelamente, representantes del Ministerio Público hicieron de conocimiento la apertura de investigación contra el alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, y otros dirigentes sociales, líderes y responsables de la huelga en esa región. El alcalde es finalmente arrestado el 30 de mayo y liberado el 13 de junio, en tanto se consideraron vulnerados sus derechos. El conflicto y las manifestaciones violentas finalizan con el retorno del alcalde a Espinar después de su liberación.

La etapa de negociación inició en agosto del año pasado. Consistía en reuniones continuas entre los principales actores que participaron de la movilización. Según el alcalde, «se subdividió en tres grupos: grupo de tema ambiental, grupo de responsabilidad social y otro. Cada grupo tenía su dinámica de reuniones cada diez o quince días. Esto se fue desarrollando desde agosto del año pasado hasta noviembre. En enero, febrero y marzo, algunos grupos culminaron. Los temas pendientes son responsabilidad social y medioambiente» (Mollohuanca 2013).

Sobre la participación de las organizaciones sociales en la etapa de negociación, el propio Mollohuanca considera que «sí hubo participación de la sociedad civil de manera activa a través de sus representantes. No todos los dirigentes tenían disponibilidad de tiempo para asistir. Esto limitaba ampliamente el tema de la participación». Sobre el caso de la municipalidad, el alcalde participó en la mayoría de las reuniones dentro de los tres grupos mencionados (Entrevista 03 E 2013).

La polarización y negociación de los alcaldes

En esta sección se analiza el conflicto en tres momentos: la planificación, la acción y la negociación. De esta menra, se plantea que hay una evolución en el rol del alcalde y su participación en la movilización.

La etapa de planificación

La etapa de planificación del conflicto carece de una presencia fuerte por parte de las autoridades sub-nacionales en los casos estudiados. En concreto, podría decirse que el rol de liderazgo es asumido por las organizaciones sociales, concretamente los Frentes de Defensa.

Primero, en el caso de Guillén, el entonces alcalde de Arequipa estaba negociando la privatización de la Caja Arequipa, empresa que aún genera ganancias a la región. Guillén habría cambiado de parecer y se habría sumado al conflicto a pesar de sus preferencias. Esta decisión fue tomada, principalmente, por una cuestión política, para ganar adeptos (Entrevista 01 A 2013). Cabe resaltar que su popularidad había caído a un 8% antes del estallido en junio.

Asimismo, el alcalde se habría sumado a las medidas de fuerza del FACA hasta cuatro días después de iniciadas las protestas iniciales. Si bien Guillen era reconocido como un liderazgo importante en la ciudad, no se manifestó claramente en contra de la privatización de EGASA (Entrevista 03 A 2013). Esto podría deberse al protagonismo que asumió el FACA, dejando sin capital electoral a los otros posibles dirigentes de la movilización.

Finalmente, en una primera oportunidad, Guillén se había pronunciado en contra de la privatización; pero no participa activamente de las movilizaciones, que mantienen una baja convocatoria hasta la aparición del alcalde en la escena (Entrevista 07 A 2013). No se conoce de reuniones que hayan sido llevadas a cabo entre el FACA y Guillén para tratar los temas resaltados en la movilización de junio, como la privatización de las empresas privadas, el modelo neoliberal, la creciente desigualdad socioeconómica, etcétera. Además, los encargados de coordinar las acciones de lucha fueron los miembros del Comando de Huelga del Frente Amplio Cívico de Arequipa, liderado por Jorge del Carpio. Tampoco se sabe que se hayan dado reuniones entre este grupo y el alcalde o sus allegados.

Incluso Guillén habría mantenido una relación muy cercana con el ex Presidente Alejandro Toledo al momento del estallido del conflicto (Entrevista 01 A 2013). Esto en relación a la política de descentralización, pues fue escogido por el propio Toledo como uno de los dirigentes regionales que debían representar el espíritu de esta política.⁴ Y, si bien Guillén no habría ejercido nunca dicha función más allá de una reunión llevada a cabo en Ilo en el año 2001, este fue un punto clave para las buenas relaciones con el gobierno central.

Ante ello, puede considerarse que se trató de una participación pasiva, que incluso bordaba la indiferencia ante el reclamo. Probablemente los ideales políticos del entonces alcalde estaban contrapuestos con las demandas de la población; sin embargo, ante la presión de los dirigentes sociales y de la propia población, el alcalde se suma durante el periodo de la acción.

Una situación similar es la de Óscar Mollohuanca, quien estaba en pleno proceso de negociación y diálogo con los representantes de Xtrata cuando el FUDIE convoca a la primera movilización. Si bien el alcalde manifiesta que el proceso de diálogo no era el mejor, Víctor Caballero menciona que se estaba llegando a un acuerdo inicial. La participación de Mollohuanca en esta etapa podría responder al tipo de participante activo.

«Él tiene un protagonismo propio a nivel de Cusco y en Espinar. Oscar Mollohuanca es el alcalde. Él no convoca directamente, quienes convocan directamente son las organizaciones sociales de Espinar, en este caso la FUDIE especialmente, [...] todas las organizaciones vivas de Espinar se suman a través del FUDIE y convocan a la movilización del 21 de mayo [...]. Él se suma digamos en términos para darle legitimidad o más presencia política al reclamo de Espinar; pero ahí el liderazgo lo asume Herberth Huamán quien es el que lidera el movimiento en ese entonces. Además Óscar también sabía que como alcalde no podía hacer eso, porque esto podría ser perjudicial para él. Por su presencia [...] se le involucra como el directo instigador que es el que convoca. Yo siento que hay una especie de poder compartido entre el FUDIE y el municipio a través de Óscar Mollohuanca [...] y buscan puntos de consenso y acuerdo sobre lo que Espinar plantea» (Entrevista 04 E 2013).

Mollohuanca había sido relegado de toda función organizativa durante el proceso de convocatoria a la sociedad, a favor de antiguos liderazgos radicales de la provincia (Entrevista 08 E

⁴ La República. 2001. Juan Manuel Guillén, presidente de Primer Consejo Nacional de Descentralización. <http://archivo.larepublica.pe/01-07-2001/juan-guillen-presidente-del-primer-consejo-nacional-de-descentralizacion-la-primer-tarea>

2013). En esta etapa de planificación, se reconoce la participación del alcalde pero desde una postura de negociación, como el encargado de tomar las decisiones en las conversaciones con la empresa minera (Entrevista 02 E 2013). El rol del FUDIE en la movilización fue la concientización, de manera que se buscó sensibilizar al gran sector que no estaba prestando importancia a la problemática de Espinar.

«El FUDIE es una estancia máxima de representatividad de las organizaciones vivas tanto del ámbito rural y urbano [...], siempre ha tenido como objetivo, desde el 2005 [...] la reformulación del Convenio Marco. Pero la empresa minera en su política propia siempre ha sido controlar los gobiernos de turno, los alcaldes provinciales, tal es el caso del alcalde provincial Luis Álvarez o Eloy Chancayauri siempre han estado sumisos a los acuerdos o decisiones que tomaba la empresa minera [...]. El FUDIE ha tenido un rol muy importante que ha estado en paralelo a la decisión política del alcalde Mollohuanca; siempre respetando la representatividad del gobierno local» (Huaylla 2013).

El FUDIE sintió la necesidad de convocar a la población en tanto se notaba pasividad de parte del gobierno local en el proceso de renegociación del Convenio Marco. Es más, una de las primeras manifestaciones se dio en las puertas de la propia municipalidad, convocando la participación del alcalde en las medidas de fuerza (Entrevista 03 E 2013).

Las reuniones celebradas con el fin de coordinar el paro indefinido del 21 de mayo de 2012 en Espinar son convocadas a través de medios de comunicación radiales, así como mediante las asambleas vecinales mensuales (Entrevista 01 E 2013). Óscar Mollohuanca participó en algunas de estas asambleas; sobretodo, en lo referente a temas de gestión municipal, concretamente en obras de gran envergadura que involucraban la participación activa de los vecinos. No obstante, en lo referido a las movilizaciones, se mantuvo al margen en todo momento (Entrevista 02 E 2013).

Aún así, la actitud pasiva del alcalde de Espinar solo es evidente en la planificación, ya que una vez convocada la paralización, él aparece en el centro de la Plaza de Armas junto a Herberth Huamán.

La etapa de acción

La acción en los conflictos se inicia cuando finalmente se logra la convocatoria de adeptos a las demandas planteadas y se busca llamar la atención a los sujetos de demanda. En ambos casos, el inicio se ve marcado por una medida de fuerza que implica la ocupa de un espacio público como es la Catedral en Arequipa, y la Plaza de Armas de Espinar.

Durante estas acciones, el rol que ocupa Guillén es particularmente resaltante en la medida que tanto las organizaciones sociales como los otros partidos políticos lo señalan como el dirigente de la movilización. Al respecto, Alipio Montes menciona lo siguiente.

«[Guillén] entra a tallar dos o tres días después me parece, ya que Arequipa se declaró en huelga, y llama a la movilización. Ahí estalla en el proceso, pero repito varios días después de estas movilizaciones previas. No fue Guillén el que decidió encabezar la movilización, fueron otros grupos; pero tampoco fue masivo ¿Cuándo fue masivo? Cuando Guillén decide encabezar la movilización» (Montes Urday 2013).

La participación activa aparece entonces cuando Guillén organiza la huelga de hambre de los alcaldes distritales en la fachada de la entonces Municipalidad Provincial de Arequipa. Sin

embargo, escala rápidamente hacia un rol protagónico cuando se inician las concentraciones en la Plaza de Armas.

Para aclarar la evolución del rol de Guillén, debe considerarse la incapacidad de convocatoria que poseían los dirigentes del FACA, y como esta devino en el espacio político propicio para el protagonismo de Guillén.

«Los más sorprendidos hayan [sic] sido los dirigentes del FACA, que no se cansaban de llamar a la revuelta a la población, y que cuando por fin fueron oídos no supieron qué hacer, pues las masas enardecidas se negaban a aceptarlos como los líderes naturales de la protesta. Así, tuvo que ser llamado el alcalde de ese entonces, Juan Manuel Guillén para que asumiera el liderazgo de un movimiento cuyo reclamo principal él mismo no compartía» (Ramos 2009).

Este protagonismo asume el carácter de liderazgo gracias a las diferentes actuaciones públicas que tuvo el alcalde con la población, desde conferencias de prensa hasta mítines políticos. En ellos, se le brinda a él la palabra central y, por ende, un espacio único para posicionarse como el líder de la movilización.

Por otro lado, los medios nacionales y regionales destacaron el rol del alcalde en las movilizaciones, reconociéndolo como el principal dirigente.⁵ Al respecto, Fernando Calderón realiza un trabajo de recolección y análisis de periódicos de circulación nacional durante los días 14 al 22 de junio de 2002, «constituyéndose un corpus documental de 56 ejemplares. La parte de estos diarios que analizo son las editoriales, artículos de opinión y el tratamiento de la noticia que realizó cada uno» (Calderón 2010:3).

Por ejemplo, El Comercio, apoyó desde un principio las privatizaciones de las empresas públicas. Una fórmula repetida en sus editoriales expresa la relación siguiente: «más privatización es igual a más inversión» y, de este modo, la existencia de un Estado más eficiente. Además, termina identificando, en oposición a estas ideas, a grupos de izquierda y al APRA, argumentos que se muestran en las editoriales del 14 y 19 de junio del 2002. «Durante los siguientes días, El Comercio exigirá al gobierno mantener su posición y no ceder a las protestas, anunciando el envío de tropas desde Lima, las mostró como el medio indicado para disuadir a los protestantes. Pero la imagen de Arequipa que se dibuja en este diario es romántica, tradicional, casi campesina o rural» (Calderón 2010:10).

Por otro lado, La República criticó la insistencia del gobierno en continuar con este proceso sin solucionar antes las continuas protestas y huelgas de hambre. Además, desde el día 16 de junio, en su editorial, se expresaba la necesidad de formar una comisión mediadora para dialogar con los dirigentes locales. También se distinguió entre las protestas de la población y los actos vandálicos ocasionados por personas que «se plegaron a último momento». La referencia en la editorial del 18 de junio de 2002 no es clara respecto a si señala a Guillén como responsable o no. Sin embargo, debe recalcar el rol central que tenía el alcalde provincial en todas las noticias publicadas por ambos medios.

En el caso de Mollohuanca, se dieron espacios para la legitimación del liderazgo del alcalde. El más reconocido, a parte de los mítines en la Plaza de Armas, fueron las reuniones públicas que se mantuvieron con los dirigentes de los principales mercados de la provincia y los dirigentes del FUDIE. En ellas, el alcalde daba un discurso de apoyo total a las demandas por una convivencia con la empresa minera que mantenga estándares ambientales responsables.

5 El diario La República se enfocó sobretudo en la capacidad de convocatoria de Guillén durante el conflicto. Por otro lado, Radio Programas del Perú realizó un seguimiento continuado del conflicto, entrevistando a los dirigentes del FACA y manifestantes; los cuales indicaban que sin el apoyo del alcalde no se podrían haber organizado.

No obstante, realmente lo que el pueblo quería era la salida de la Xstrata así como de toda actividad extractiva dentro de la provincia (Entrevista 09 E 2013). Este dilema se le planteó al alcalde como una oportunidad para asumir una postura más contundente respecto de los lineamientos hacia los que orientaba su gestión municipal; sin embargo, mantuvo siempre el discurso de la negociación del Convenio Marco.

En las acciones violentas, los entrevistados coinciden en que sí participó, pero de manera pasiva. No era quien encabezaba dichas acciones ni movilizó a la población hacia el intento de toma de la empresa minera.

Al respecto, el rol que adopta el alcalde durante la etapa de la acción del conflicto es el de «un alcalde que trata de ser consecuente con sus lineamientos y propuestas programáticas [...]. Sobre la empresa minera hemos planteado reivindicar de la mejor forma posible los derechos sociales, ciudadanos, etc. Y romper ese dominio que había antes. Eso también es bandera de las organizaciones sociales, en eso coincidimos con las organizaciones sociales. En eso tenemos una bandera común» (Mollohuanca 2013).

Por otro lado, es importante notar cómo los medios han calificado la participación de Mollohuanca a lo largo del conflicto, especialmente durante los días previos a su arresto. Los cargos establecidos en su contra incluyen peculado de uso; mientras que para el resto de investigados, disturbios, desacato a la autoridad y secuestro. Igualmente la Contraloría General de la República anunció una acción de control en la Municipalidad Provincial de Espinar para verificar las denuncias sobre el presunto uso de bienes y recursos públicos en la organización de marchas de protesta contra la actividad minera en la zona.

El 30 de mayo, Mollohuanca es detenido por considerarse que azuzaba a la población de Espinar en contra de la minera Xstrata Tintaya. Días después, el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, Miguel Díaz Chirinos, ordenó cinco meses de prisión preventiva en su contra. No obstante, cuando Mollohuanca Cruz se encontraba detenido en el penal Cristo Rey de Cachiche, la Sala Superior de Ica reconoció que en su caso se habían vulnerado derechos constitucionales, por lo que se ordenó su libertad.

La defensa del alcalde señaló que el FUDIE, del que no forma parte Óscar Mollohuanca, y otras organizaciones civiles fueron los que tomaron la decisión de acatar una huelga indefinida en la provincia cusqueña. Asimismo, pese a que se acusa al alcalde de haber utilizado recursos públicos para organizar a manifestantes durante la huelga, subrayaron que el Ministerio Público no ha formalizado una denuncia por el delito de peculado.

La capacidad de negociación

Este subcapítulo resulta más complejo que los anteriores, ya que la negociación es transversal a todo el conflicto en la medida que se mantienen canales de comunicación constantes entre los actores involucrados. Sin embargo, se puede considerar que la negociación «formal» para la resolución del conflicto ocurre a medida que las manifestaciones que se producen en la etapa de la acción van perdiendo fuerza.

Mollohuanca, antes incluso de la etapa de planificación, ya se encontraba dialogando con los actores de interés en el Estado central, para que intervengan como mediadores en una posible situación de conflicto. Se mandaron oficios a los ministerios de Energía y Minas, Medio Ambiente y Presidencia del Consejo de Ministros, pero no se obtuvo ninguna respuesta. La motivación de enviar estos oficios obedecía a la poca respuesta que ofrecían los representantes de la empresa minera para la reformulación del convenio (Entrevista 02 E 2013). Por ese entonces, no se asumía que esta demanda era legitimada por los pobladores de Espinar.

De otro lado, es importante mencionar que dicho proceso de negociación fue conducido únicamente por el alcalde y tuvo la desaprobación de muchos de los dirigentes de las organizaciones sociales. Incluso, Mollohuanca llegó a ser considerado un traidor.

De acuerdo con otras versiones, el alcalde tenía mayores intereses en negociar con la empresa minera en tanto consideraba que podría brindarle mayores beneficios. En concreto, su participación habría estado motivada por el interés 30% de la ganancia de la actividad minera de la provincia, mas no por las demandas ambientales en torno a los problemas de contaminación originados por la extracción de los minerales (Ccorahua 2013).

La negociación formal se inicia con la llegada de la comitiva de parte de la Presidencia del Consejo de Ministros a Espinar. Al respecto, la versión de Caballero indica que lo que la PCM buscó desde un inicio fue empoderar al alcalde en las reuniones, situándolo como el tomador de decisiones desde la postura de los demandantes. Para Caballero, era clave que sea el alcalde, la autoridad local, la que negociara durante la Mesa de Diálogo en tanto los dirigentes sociales habían adoptado una postura radical, que pedía incluso la salida de la empresa minera de la provincia.

Cabe resaltar que esta versión de la actuación de la PCM se complementa con la planteada por Jaime Borda, quien manifiesta que las organizaciones sociales no solo no fueron tomadas en serio en las reuniones de negociación, sino que a su vez se mostraron escépticas ante la posibilidad de llegar a un acuerdo (Borda 2013).

El proceso de negociación se constituyó en tres mesas temáticas. A todas ellas asistió el alcalde provincial, dándole prioridad a la del eje temático de medio ambiente. Sin embargo, los dirigentes sociales no se presentaron a varias de las reuniones. A pesar de su activa participación, el alcalde no pudo cubrir la totalidad de las reuniones por una cuestión de horarios. «En la municipalidad también, no se logró la participación plena con un equipo permanente. Se han tratado de grupos que han ido cambiando porque de otro lado tenemos la gestión municipal. La empresa minera sí logró tener una batería con un contingente de profesionales para cada grupo» (Mollohuanca 2013).

El proceso es claramente diferente al llevado a cabo en Arequipa en términos logísticos. En dicha región se celebraron tan solo tres reuniones con los representantes del Estado central y los dirigentes del Arequipazo.

Un punto de quiebre que demuestra esta actitud de *broker* político es la etapa de negociación en la medida en que «lo que la gente pide a gritos y lo que Juan Manuel Guillén reclama a los intermediarios del gobierno es diferente. Los primeros exigen la anulación y suspensión definitiva de la privatización de EGASA, mientras que Guillén pide una consulta popular para que sea la ciudadanía la que decida con su voto si procede o no la privatización» (Ramos 2009).

En esto es semejante a Mollohuanca en tanto ambos aparecen como conciliadores o apaciguadores del conflicto, ya que plantean una solución intermedia al comienzo de las negociaciones. En Espinar, Mollohuanca aboga por una renegociación consensuada del Convenio Marco con la participación activa de la ciudadanía, primer gran resultado de las movilizaciones en dicha provincia. En cuanto a Guillén, si bien no se da la solución que él planteaba, este discurso fue el que parece haber motivado la llegada de la comitiva para la resolución del conflicto a Arequipa.

Lo que ambos alcaldes buscaron fue terminar de la manera más rápida posible la situación de inestabilidad en su localidad, de manera que apuntaron a conseguir el mejor acuerdo posible para todas las partes involucradas.

Conclusiones

Para complementar lo expuesto en los capítulos anteriores, es pertinente profundizar en las conclusiones generales que permiten comprobar que efectivamente es el alcalde quien asume

al final un rol protagónico en el conflicto, comportándose como el *broker* político que articula las demandas de su población.

Tanto en Arequipa (2002) como en Espinar (2012), los alcaldes encontraron la oportunidad para relanzarse políticamente mediante el conflicto en tanto eran el único canal de representación que intervenía entre sus electores y el Estado. Ambos, tras decidir mantener un esquema de participación evolutivo, que parte del desinterés de la planificación de las acciones de los manifestantes hasta el liderazgo absoluto en las negociaciones para su resolución, lograron mantenerse en el cargo a lo largo de su gestión.

El relanzamiento político para el entonces alcalde provincial de Arequipa es claro, ya que tras dedicarse un periodo electoral a solucionar los problemas legales tras el Arequipazo, logró reordenar su entorno político y asumir el cargo de Presidente Regional. Si bien los entrevistados han mencionado la baja popularidad de Guillén en este segundo periodo, no descartaron una reelección en 2014 debido a las fuertes relaciones que mantiene con las organizaciones sociales de Arequipa. En dichas elecciones, si bien no se presentó Guillén por aparentes motivos de salud, quien ganaría sería su sucesora, escogida dentro de las bases del partido fundado por él mismo (Arequipa Tradición y Futuro). Sin embargo, no fueron las organizaciones sociales la clave, ya que actualmente no se encuentran agrupadas en el FACA.

«El FACA en la práctica no existe [...] hay alguien que quiere seguir llamándose FACA pero esta ya no existe. La coordinadora que está surgiendo representa más bien el cogobierno con Juan Manuel Guillén [...] nunca organización sindical puede ser el gobierno [...] hay una incongruencia» (Del Carpio 2013).

Los dirigentes del FACA se han caracterizado por una desgastada trayectoria política. Es conocido que tanto Gerónimo López como Luis Saraya se postularon para regidores dentro de las elecciones de 2002, meses después de ocurrido el conflicto. Actualmente, Saraya trabaja en el Gobierno Regional mientras que López mantiene el co-gobierno con Guillén.

En el caso de Mollohuanca, el relanzamiento político se traduce en la renovada fe en su gestión durante los meses de negociación inicial. Al respecto, de acuerdo con los entrevistados, se desestimaron los intentos de revocatoria conducidos por la oposición aprista. De otro lado, se logró el apoyo generalizado de las organizaciones sociales que anteriormente cuestionaban su capacidad de gestión.

«[En las elecciones de 2010] yo no tenía pensado postular, lo que pasa es que a nivel interno se tuvo una acción de persuasión porque en la evaluación política veían que la persona con mayores posibilidades de proyección como candidato lo veían en mí. Fue decisión política colectiva por Tierra y Libertad. [Respecto de una reelección] siempre respeto al colectivo. Yo no me autopropongo».

Si bien en la entrevista descartó que postulara a una reelección, tanto Huaylla como Borda reconocen que su popularidad se ha remontado lo suficiente como para asumir el reto de un segundo periodo. El factor de liderazgo podría haber cambiado la noción que se tenía de él en la población acerca de su incapacidad para gestionar de manera adecuada los recursos de la provincia. Sin embargo, posteriormente, en su candidatura a un cargo de mayor rango, se ve frustrado por los otros éxitos taquilleros.

Esta tesis plantea que es posible identificar otros casos similares de autoridades locales que hayan asumido el mismo esquema de participación en un conflicto social y que, dado el caso, hayan obtenido un relanzamiento político. Sin embargo, dicha hipótesis está sujeta a condiciones

como una baja notoria en la popularidad de la autoridad al momento de iniciar el conflicto, su capacidad de asumir tareas dentro de la organización de la manifestación de manera exitosa, la convocatoria que tenga para establecer acuerdos con otras organizaciones así como con los objetos de demanda, y la multiplicidad de opciones que existan para la resolución del conflicto.⁶

Casos como el conflicto de Conga aparecen fuera de este esquema en la medida que solo cumple con la segunda condición. Gregorio Santos no solo representa la intermediación existente entre el nivel regional y nacional; sino que además ha logrado obtener capital político a través de una postura radical que obedece a las demandas sociales de la población. La demanda ha sido construida durante casi veinte años en los cuales diferentes empresas mineras actuaron en Cajamarca.

Igualmente, hago referencia a la posibilidad de desarrollo de Cajamarca en cuanto a otras industrias presentes en la región, no solo la extractiva. Dichas posibilidades, si bien inciertas, han reforzado el discurso del grupo radical que pide la salida de todo tipo de minería. Ante ello, el gobierno regional y local ha decidido plegarse a las demandas.

La hipótesis, entonces, está sujeta a algunas condiciones clave ya mencionadas que, sin ser consideradas, podrían hacer que el tipo de participación descrito resulte incluso contraproducente.

Sin duda es necesaria una agenda de investigación que profundice en las dinámicas políticas a nivel subnacional, de manera que pueda determinarse si el factor identificado para estos dos casos tan disímiles es también seguido por otros actores políticos locales.

Referencias

- Barrantes, Roxana y otros. 2012. *Las posibilidades del desarrollo inclusivo: dos historias regionales*. Lima: IEP.
- Calderón, Fernando. 2010. «Diversas Lecturas de una Protesta. Los periódicos de lima frente a los sucesos en Arequipa del 2002». *Revista Arequipa* 2010.
- De Echave, José y otros. 2009. *Minería y conflicto social*. Lima: IEP.
- Diani, Mario. 2004. «Leaders or Brokers? Positions and Influence in Social Movement Networks». *Social Movements and Networks: Relational Approaches to Collective Action*. Ed. M. Diani.
- Diez, Alejandro. 2003. *Elites y poderes locales: sociedades regionales ante la descentralización. Los casos de Puno y Ayacucho*. Lima: Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional.
- Gansz, Marshall. 2008. *Leading Change: Leadership, Organization, and Social Movements*. Boston: Harvard Business Press
- Grompone, Romeo. 2005. *La escisión inevitable: partidos y movimientos en el Perú actual*. Lima: IEP.
- Guillén, Ana. 2003. *El Detonante*. Arequipa: Intermedios.
- Hurtado, Víctor. 2013. «Entrevista 06 A a J. Morel». 22 de abril.
- . 2013b. «Entrevista 06 E a J. Torres». 22 de abril.
- . 2013c. «Entrevista 05 E a E. Cáceres». 29 de abril.
- . 2013d. «Entrevista 07 A a A. Montes Urday». 03 de mayo.
- . 2013e. «Entrevista 05 A a C. Acurio». 03 de mayo.

⁶ Como se mencionó anteriormente, tanto en Arequipa como en Espinar existe un grupo de dirigentes de organizaciones sociales que pedía el cese total de los intentos de privatización en la región o de industrias extractivas, respectivamente. Sin embargo, en ambos casos se llegó a un punto medio de negociación para la resolución del conflicto.

- 2013f. «Entrevista 03 A a J.L. Vargas». 03 de mayo.
- 2013g. «Entrevista 04 A a A. Herrera». 04 de mayo.
- 2013h. «Entrevista 01 E a Ó. Mollohuanca». 06 de mayo.
- 2013i. «Entrevista 07 E a R. Ccorahua». 07 de mayo.
- 2013j. «Entrevista 02 E a W. Huaylla». 07 de mayo.
- 2013k. «Entrevista 03 E a H. Quispe». 07 de mayo.
- 2013l. «Entrevista 08 A a M. Cáceres». 08 de mayo.
- 2013m. «Entrevista 02 A a G. Lóez Sevillano». 08 de mayo.
- 2013n. «Entrevista 09 E a L. Ccapa». 09 de mayo.
- 2013ñ. «Entrevista 01 A a J. Del Carpio». 09 mayo.
- 2013o. «Entrevista 04 E a J. Borda». 24 de mayo.
- 2013p. «Entrevista 08 E a V. Caballero». 28 de mayo.
- McAdam, Doug. 2004. *Dynamics of Contention*. London: Cambridge University Press.
- McNulty, Stephanie. 2011. *Voice and Vote: Decentralization and Participation in Post-Fujimori Peru*. Stanford: Stanford University Press.
- Meléndez, Carlos. 2006. «Mediaciones y conflictos: las transformaciones de la intermediación política y los estallidos de violencia en el Perú actual». *Gobernabilidad. Revista de sociedad y Estado*.
- Meléndez, Carlos. 2012. *La Soledad de la Política: transformaciones estructurales, intermediación política y conflictos sociales en el Perú (2000-2012)*. Lima: Mitin
- Morris, Aldon y Suzane, Staggenborg, S. 2002. Leadership in Social Movements. <http://www.sociology.northwestern.edu/people/faculty/documents/Morris-Leadership.pdf> (18 de abril).
- Muñoz, Paula. 2005. *El diseño institucional municipal 1980-2004 y sus implicancias para las zonas rurales*. Lima: SER.
- Ramos, José. 2009. «Discursos, sujetos y democracia representativa en la gesta de Arequipa de 2002». *Movimientos sociales y democracia en el Perú de hoy: Reflexiones a propósito de la gesta de Arequipa*. Ed. E. Tejada,
- Remy, Marisa. 2013. «Las revocatorias en el Perú: entre la participación masiva y la debilidad institucional». *Revista Argumentos*.
- Saraya, Luis. 2006. *La Gesta de Junio. Testimonio de lucha*. Arequipa.
- Tanaka, Martín. 2001. *Participación popular en políticas sociales: cuándo puede ser democrática y eficiente y cuándo todo lo contrario*. Lima: IEP.
- Vargas, Carlos. 2001. «Liderazgos locales y nuevos estilos de hacer política bajo la sombra del fujimorismo». En M. Tanaka. *El poder visto desde abajo: democracia, educación y ciudadanía en espacios locales*. Lima: IEP.

Anexo 1

Lista de fuentes periodísticas revisadas

- EL BÚHO “Mayoría de alcaldes se aferra al sillón. Salvo el poder, todos es ilusión”. En: El Búho. Año 3. Arequipa. Viernes 4 de octubre del 2002. P. 4-5
- EL BÚHO “La maraña judicial de Egasa. Yo fallo, tu fallas... y todos nos fallaron”. En: El Búho. Año 3. Arequipa. Viernes 11 de octubre del 2002. P. 4-5
- EL BÚHO “El Municipio Provincial Es Una Bomba de tiempo”. En: El Búho. Año 3. Arequipa. Viernes 08 de noviembre del 2002. P. 4-5
- EL BÚHO “Alcalde Regalón. Avalancha de obras al final de la Gestión Guillén”. En: El Búho. Año 3. Arequipa. Viernes 08 de noviembre del 2002. P. 6-8
- EL BÚHO “Réquiem para el FACA”. En: El Búho. Año 5. Arequipa. Viernes 12 de marzo del 2004. P. 4
- EL BÚHO “Tras los restos del FACA. La hora de los cuervos”. En: El Búho. Año 5. Arequipa. Viernes 12 de marzo del 2004. P. 5
- EL BÚHO “FACA crucificado ¿y al tercer día...?”. En: El Búho. Año 5. Arequipa. Viernes 12 de marzo del 2004. P. 6
- ROCÍO SILVA SANTISTEBAN “Óscar Mollohuanca: preso de conciencia”. En: La República. Lima. Domingo 10 de junio del 2012.
- LA REPÚBLICA “Tras ser liberado. Óscar Mollohuanca: si no hubieran fallecidos en Espinar no nos habrían escuchado”. En: La República. Lima. Miércoles 13 de junio del 2012.
- LA REPÚBLICA “Óscar Mollohuanca expresa disposición al diálogo con el gobierno y Xstrata”. En: La República. Lima. Jueves 14 de junio del 2012.
- LA REPÚBLICA “Óscar Mollohuanca: Mesa de Diálogo en Espinar no ha llegado a ningún acuerdo todavía”. En: La República. Lima. Sábado 07 de julio del 2012.